

SESIONES ORDINARIAS

2000

ORDEN DEL DIA N° 1279

COMISIONES DE LEGISLACION DEL TRABAJO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Impreso el día 24 de octubre de 2000

Término del artículo 113: 2 de noviembre de 2000

SUMARIO: **Amenazas** de muerte que en forma anónima sufriera la responsable regional de la oficina de empleo en la ciudad de Santa Fe. Expresión de repudio. **Iparraguirre** y **Tejerina**. (2.281-D.-2000.)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Seguridad Interior han considerado el proyecto de declaración de los señores diputados Iparraguirre y Tejerina, por el que repudia las amenazas sufridas por la responsable de la oficina de empleo de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.

Sala de las comisiones, 18 de octubre de 2000.

*Juan C. Passo. – José H. Jaunarena. –
Alfredo N. Atanasof. – Manuel J. Baladrón. – Gerardo A. Martínez. – Agustín Díaz Colodrero. – Alfredo J. Castañón. – Jorge Baldrich. – Omar E. Becerra. – Adalberto L. Brandoni. – Oraldo N. Britos. – Héctor J. Cavallero. – Juan P. Cafiero. – Enrique G. Cardesa. – Juan C. Farizano. – Gustavo C. Galland. – Carlos R. Iparraguirre. – Arturo P. Lafalla. – Fernando R. Montoya. – Alejandro M. Nieva. – Lorenzo A. Pepe. – Ricardo C. Quintela. – Margarita R. Stolbizer. – Marcelo J. Stubrin. – Atilio P. Tazzioli. – Arnaldo M. Valdovinos. – Ricardo H. Vázquez. – Juan D. Zacarías. – Ovidio O. Zúñiga.*

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio a las amenazas de muerte que en forma anónima sufriera la responsable regional de la oficina de empleo en la ciudad de Santa Fe.

Carlos R. Iparraguirre. – Julio A. Tejerina.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Seguridad Interior al considerar el proyecto de declaración de los señores diputados Iparraguirre y Tejerina, creen innecesario abundar en más detalles que los expuestos por los autores en los fundamentos de la iniciativa, por lo que aconsejan su aprobación.

Margarita R. Stolbizer.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Es imprescindible manifestar el repudio a todo tipo de amenazas, pero de manera muy especial, cuando ellas son anónimas y van dirigidas a intimidar a hombres o mujeres en el ejercicio de su función pública.

En este caso la responsable de la gerencia de empleo en la ciudad de Santa Fe, doctora Amalia López Rosas, fue víctima de amenazas por vía telefónica y de manera anónima, en el medio de una serie de reclamos y movilizaciones de grupos que demandan por mayor cantidad de planes de trabajo.

La situación social que atraviesa nuestro país es por todos conocida, de la misma manera que la difícil situación del Estado nacional, pese a lo cual se hacen ingentes esfuerzos para garantizar la necesaria contención social que se requiere ante las urgencias de vastísimos sectores de nuestra sociedad.

No sólo el gobierno nacional está en este esfuerzo y ha asumido este compromiso, es también el de los gobernadores provinciales, el de los intendentes municipales y en general de toda la dirigencia política, sin distinción de banderías partidarias.

En el marco de ese esfuerzo son legítimos los reclamos, merecen ser escuchados y respetados por la misma urgencia que justifica a quienes hoy desean tener un trabajo digno. Pero esto no significa aceptar el chantaje de aquellos que fruto del clientelismo político pudieron haber obtenido en su momento beneficios que hoy no pueden conservar, ni tampoco de aquellos que son utilizados por perso-

nas o grupos que sólo tienen por objeto el descrédito de la política o los gobiernos, o lo que aún es peor, de aquellos que buscan mantener beneficios personales aprovechándose de quienes más necesitan.

Pero si los reclamos son legítimos, de ninguna manera se puede justificar que se ejerza presión a partir de la amenaza y la intimidación.

Entonces, esta Cámara debe expresarse en repudio a las mismas, y en solidaridad con quien debe sentirse debidamente respaldada para continuar con su función y así ejercerla con total objetividad en la aplicación de programas que precisamente por las dificultades del Estado y por las necesidades de la población, deben aplicarse con el mejor aprovechamiento posible de los recursos y con la mayor transparencia posible, para que los mismos cumplan con el destino que tienen.

Carlos R. Iparraguirre. – Julio A. Tejerina.